



En contestación al escrito de un particular, solicitando aclaración sobre cuándo un sistema de video vigilancia o un circuito cerrado de televisión se considera un sistema de seguridad y, por tanto, realizable únicamente por una empresa autorizada, esta Secretaría General Técnica puso de manifiesto las siguientes consideraciones:

En numerosos informes emitidos por esta Secretaría General Técnica se ha puesto de manifiesto que las actividades de instalación y mantenimiento de los aparatos o dispositivos que integran un sistema de seguridad corresponden necesariamente a empresas de seguridad inscritas como tales en el correspondiente Registro de Empresas de Seguridad, cuando concurren las siguientes circunstancias:

- Que se trate de aparatos o dispositivos electrónicos, por contraposición a medidas de protección físicas o de cualquier otro tipo.

- Que el objeto de su instalación sea la prevención contra el robo o la intrusión.

- Que la activación de tales aparatos o dispositivos sea susceptible de producir intervención policial. Este último requisito debe entenderse con independencia de que el sistema de seguridad esté o no conectado a una central de alarmas.

A lo anterior debe añadirse que la finalidad de la instalación de tales aparatos o dispositivos es fundamental para su definición o catalogación como sistema de seguridad, ya que, si resulta patente que entre sus funciones no se encuentra su uso para prevenir la comisión de hechos delictivos, no cabría su consideración como sistema de seguridad a los efectos previstos en la normativa de seguridad privada y, en consecuencia, su instalación podría hacerse por empresa que no fuese de seguridad.

En cuanto al requisito de que la activación de los repetidos aparatos o dispositivos sea susceptible de producir intervención policial, entiende esta Secretaría General Técnica, de acuerdo con el parecer expuesto en su escrito de consulta, que la posible intervención de efectivos policiales no tiene que producirse necesariamente de forma inmediata o en tiempo real, sino que podría tener lugar con posterioridad a la comisión del supuesto hecho delictivo; incluso que fuera la autoridad judicial y no policial el órgano interviniente, o que la intervención policial estuviese motivada por decisión de la autoridad judicial competente.



En conclusión, se reiteran las consideraciones expuestas por este Centro Directivo en anteriores informes sobre la materia, con las dos matizaciones añadidas sobre la finalidad de los sistemas de video vigilancia y la posible intervención policial o judicial por su activación.